

CONFLICTO Y REGIÓN







IDENTIDADES
POLÍTICAS,
INTERVENCIÓN
ESTATAL Y
PARAMILITARES
EL CASO DEL
DEPARTAMENTO
CÓRDOBA

MAURICIO ROMERO¹

1 Investigador asociado del CINEP y del IEPRI. Este trabajo se realizó dentro del proyecto de investigación "Variaciones Regionales y Gobernabilidad (1974-1994)", y contó con financiación de Colciencias y del Cinep. El texto se benefició con comentarios y sugerencias de Deena Abu-Lughod, del New School for Social Research (New York), de los miembros del grupo Sociedad Civil y Estado, del Cinep, y de "El Gólgota", seminario de discusión del IEPRI, en la Universidad Nacional.



diferencia de la mayoría de los conflictos armados contemporáneos, en Colombia, las partes enfrentadas hablan el mismo idioma, no parecen tener rivalidades étnicas, tampoco discrepancias raciales, ni mucho menos religiosas. La relevancia de estas diferencias en identidad se puso de presente en las recientes guerras civiles en África y Europa central, en donde se invocaron para organizar el *apartheid*, origen del conflicto armado en Suráfrica, o para consolidar poder político y separar y enfrentar poblaciones que hasta hace poco convivían juntas, como en la antigua Yugoslavia o en Ruanda (Brubaker, 1996; Mandani, 1996). En Colombia, por el contrario, el choque de ese tipo de identidades no ha sido un elemento decisivo del enfrentamiento.

En Centroamérica, y recientemente en México, la diferencia de identidad étnica ha representado un factor clave de las rebeliones armadas, como lo demostró el caso extremo de Guatemala, y ahora el de Chiapas. Lo más cercano a esa clase de rivalidades en nuestro país ocurrió con la guerrilla indígena del Movimiento Quintín Lame en los años 80, el cual fue más bien pequeño en relación con los otros grupos insurgentes -FARC, ELN, M-19, EPL- y limitado a una región en el suroccidente del país (Peñaranda, 1998). ¿Cómo, se puede, considerar entonces la confrontación armada en Colombia, donde esas diferencias en identidades, origen del antagonismo en otros casos, están ausentes, o al menos, en apariencia, no son su causa directa? O, ¿cómo entender la prolongación de un conflicto que los sucesivos gobiernos desde inicios del Frente Nacional habían enmarcado dentro del enfrentamiento Este-Oeste, si lo que se conoció como Guerra Fría llegó a su fin hace casi una década?

El presente artículo intenta dar una respuesta a esas preguntas, explorando el tema de las identidades políticas y el proceso que llevó a su polarización en el Departamento de Córdoba, en el noroeste del país. La identidad política se entiende como la experiencia compartida de una relación social

entre actores individuales o colectivos que incluye terceras partes y en la cual, al menos una de ellas, controla una porción significativa de medios de coerción. Esa experiencia y sentido compartidos van acompañados de una representación pública, generalmente en la forma de una narrativa que refuerza una memoria colectiva. Por medio de esa experiencia y memoria, grupos e individuos forman una concepción de su posición en una comunidad y de sus lazos con otros. Así, la identidad política, más que una causa estable de la acción colectiva, sería un resultado, un proceso cambiante de la interacción entre actores que compiten por poder, recursos y por dar un significado a la realidad (Charles Tilly, 1995, 1996; Craig Calhoun, 1991).

La polarización política en Córdoba, una región de ganadería extensiva y agricultura comercial, asiento de las temidas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, tal vez el grupo paramilitar mejor organizado del país y núcleo principal de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, permite examinar significativos cambios de identidades en varios de los principales actores políticos y sociales en los últimos 30 años en esta región. Esas transformaciones han tenido dramáticos efectos en el supuesto monopolio de los medios de violencia que debería tener el Estado, y por tanto, en su consolidación y ofrecimiento de unas condiciones mínimas para la organización de un régimen democrático. El apoyo de la presidencia a las demandas campesinas por una reforma agraria en los años 60, creó las condiciones para el inicio de ese proceso de cambio de identidades y de lealtades hacia un orden nacional. Esa forma de intervención preparó el camino, 30 años después, para la estabilización de un orden político regional sustentado en un aparato militar financiado presuntamente por propietarios acaudalados y por narcotraficantes, diferente al del Estado central.

¿Cómo sucedió ésto? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Cuál fue el papel de las diferentes organizaciones estatales? El argumento del trabajo contiene cuatro elementos principales: primero, la fragmentación del aparato estatal y la autonomía operativa de la orga-

nización militar en las regiones; segundo, los cambios en las identidades políticas –tanto en las elites como en los grupos subalternos– propiciados por la forma de intervención y las políticas del Estado central en la región; tercero, la abrumadora influencia que ganó el narcotráfico en esta zona, cuando los dos primeros factores ya estaban bien desarrollados; y cuarto, las oportunidades para la asociación, comunicación y movilización que diferentes sectores sociales y agrupaciones partidistas aprovecharon en momentos específicos del proceso político: el reformismo agrario de 1966-70, las negociaciones de paz de 1983-90, y el corto período electoral postconstituyente de 1991-92. El trabajo asume que el contexto internacional de Guerra Fría se expresó domésticamente por medio de las políticas de la organización militar y sus oponentes. De igual manera, considera que los efectos del entramado institucional sobre los comportamientos políticos se manifestaron gracias a las identidades. Sobre esto se harán algunas precisiones más adelante.



IDENTIDADES POLÍTICAS E INTERVENCIÓN ESTATAL

El razonamiento del trabajo, en su forma simplificada, indica que en un primer momento, el reformismo agrario del gobierno central a finales de los años 60 permitió, por corto tiempo, que los campesinos inclinaran la balanza de fuerzas locales en su favor. Sin embargo, los propietarios recuperaron su posición al variar la política global de desarrollo en los inicios de los años 70. El experimento redistributivo dejó descontentos a campesinos y reformistas, por un lado, y creó recelo e inconformismo entre las elites locales por la forma inconsulta de la intervención estatal, por el otro. Posteriormente, la confluencia de la política de represión contra la movilización campesina y la de contrainsurgencia para enfrentar las disidencias políticas,

contribuyó a la polarización de las identidades políticas de los grupos afectados y al crecimiento de la insurgencia guerrillera. Este hecho a su vez, aumentó el descontento entre los propietarios, ahora originado por la ineffectividad militar de la intervención estatal en la región.

En un segundo momento, la política presidencial de negociación con la guerrilla en los años 80, abrió de nuevo posibilidades de participación y comunicación pública para sectores marginados y disidencia políticas, situación que provocó la reacción contraria de militares y elites regionales. Además, los incrementos en la tributación demandada por la guerrilla a propietarios como “impuesto de guerra”, agudizó la polarización, la cual llegó al extremo de la eliminación física de la oposición política y social, y a la organización de un aparato paramilitar. Paralelo a este proceso ocurrió un reforzamiento de lealtades locales y regionales, liderada por grupos de propietarios ligados con el narcotráfico, y un debilitamiento de la identificación con la autoridad central en Bogotá. Al mirar el conflicto armado desde esta perspectiva, se entiende el porqué determinadas elites regionales decidieron optar por la “justicia por mano propia”, subvirtiendo uno de los supuestos de funcionamiento del Estado nacional, como es el del monopolio de la fuerza.

En el presente artículo se hace énfasis en los cambios en identidades políticas durante los períodos mencionados, o sea en el segundo y cuarto de los cuatro elementos identificados arriba. Lo que se inició como un proyecto reformista de redistribución de tierras en favor del campesino pobre patrocinado por el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-70), sentó las bases para una creciente desconfianza y recelo entre latifundistas y elites locales en relación con la intervención del Estado central, por un lado, y de campesinos, reformistas, radicales y activistas políticos de izquierda, por el otro. La percepción de inseguridad de la propiedad y la inversión aumentó entre los propietarios, hecho propiciado por los intentos de redistribución de la propiedad rural. Igualmente, el desencanto entre campesinos, radicales y reformistas por los pocos ries-

gos que tomó el gobierno frente a la resistencia a la reforma por parte de los propietarios y la baja capacidad burocrática para implementarla, también llevó a un descontento generalizado entre estos grupos.

En el valle del Sinú y zonas limítrofes, la ruptura de esa suerte de "pacto social" entre elites rurales y autoridades centrales debilitó las lealtades de ganaderos, comerciantes y propietarios hacia la burocracia estatal con sede en Bogotá. Esta vez, el tradicional llamado contra "el centralismo capitalino" representó algo más que un lema para cohesionar la población local en busca de recursos del presupuesto central. La masiva votación en 1970 a favor de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y en contra del candidato del gobierno saliente de Lleras Restrepo, y por tanto del candidato del Frente Nacional, se explica en parte por ese descontento (Palacios, 1995). Las elites regionales hicieron parte de las facciones de los Partidos Liberal y Conservador que se oponían a la reforma agraria y favorecían una agricultura a gran escala o una ganadería extensiva, y que eran la mayoría en el congreso. Algunos de esos grupos hicieron parte del conjunto de parlamentarios anapistas, que se aliaron a los sectores opuestos a la reforma agraria, quienes impulsieron definitivamente su proyecto de desarrollo rural desde inicios de los años 70, cuando en el congreso limitaron los alcances de la reforma y su implementación.

Igualmente, esas elites coincidieron con las fuerzas armadas en la vigilancia del orden local y en la contención del comunismo, además de compartir sus frecuentes discrepancias con el gobierno central sobre el manejo del orden público interno. Esto se vería más claro en los años 80 cuando se iniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y la guerrilla, contra las cuales una variada mezcla de sectores económicos, políticos y sociales de ciudades intermedias, zonas rurales y empresas extractivas (ganaderos, negociantes, comerciantes, transportadores, cementeras, extractoras de oro, etc.) cerraron filas con las fuerza armadas, además del apoyo público de los principa-

les grupos empresariales y políticos de las grandes ciudades. Esta alianza configuró un reto formidable en contra de las políticas de la presidencia. Esa coincidencia también abrió las puertas para que amplios grupos empresariales y de propietarios, y no sólo las organizaciones de izquierda legal y revolucionaria, demostraran con su comportamiento que era muy "tenue la línea divisoria entre la impopularidad del gobierno y la ilegitimidad del estado" (Palacios, 1995). La situación tomó giros inesperados en el valle del Sinú cuando a inicios de los años 80 entraron en escena los nuevos inversionistas en propiedad rural provenientes del narcotráfico, quienes trajeron consigo una actitud más agresiva en relación con la seguridad. Estos lideraron un cambio de identidad que fortaleció las lealtades locales y regionales a la red de poder organizada alrededor del aparato armado y tributario paramilitar, en oposición a una obediencia a una "comunidad nacional" que ni siquiera garantizaba reciprocidad en la protección a la vida o a la propiedad.

Entre tanto, campesinos, radicales y reformistas buscaron, por su lado, fortalecer lazos con redes de influencia y poder local, regional y nacional afines a sus perspectivas de reforma y cambio. A pesar de la persecución y represión estatal en los años 70, un número apreciable de estos grupos hicieron eco a las llamadas a la oposición electoral de coaliciones como la Unión Nacional de Oposición, UNO, confluencia de comunistas y liberales socialdemócratas, o a la oposición social en contra de las políticas de contención salarial, reducción en la inversión social y abandono del campesino pobre. Si bien los logros fueron pocos, la movilización hizo visibles y públicos proyectos políticos alternativos al bipartidismo, y la existencia de núcleos con elementos de una cultura radical en diferentes regiones del país, entre ella el valle del Sinú. La protesta social estuvo organizada alrededor de los sindicatos de maestros (Fecode), trabajadores del estado (Fenaltrase) y grupos de jóvenes cristianos quienes proponían proyectos de sociedad más igualitarios, un estado más democrático y espacios públicos y comunicativos más participativos. Por el contrario, la

actitud antisindical y antipopular de los gobiernos del Frente Nacional y de sus sucesores, creó una audiencia para los llamados a la rebelión armada por parte de agrupaciones como el Ejército Popular de Liberación, EPL, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organizaciones que, para inicios de los años 80, tenían gran arraigo e influencia en las serranías de San Jerónimo y Abibe, y en el nudo de Paramillo.

La alianza con esta redes opositoras y subversivas en los años 70 fortaleció identidades radicales, las cuales promovían proyectos políticos de mayor participación pública y más protección estatal frente a los efectos del mercado en la sociedad. Igualmente, esa confluencia debilitó aún más la lealtad de campesinos, trabajadores y activistas sociales y radicales frente a el Estado central —en ese momento todavía monopolio del bipartidismo liberal-conservador— al tiempo que fortaleció una identidad política de oposición a esta coalición, y en general, contra el orden político forjado alrededor de esos dos partidos. Así, los años 80 llegaron en el valle del Sinú y sus alrededores en medio de una redefinición de identidades y lealtades que afectó a los sectores subalternos, y también, aunque en menor medida, a las elites locales y regionales.

El inicio de las negociaciones de paz con la guerrilla por el presidente conservador Belisario Betancur en 1983 y la amnistía a más de 500 guerrilleros detenidos, marcó otro hito en las relaciones de las altas esferas cordobesas con el centro y en la redefinición de sus lealtades hacia el poder burocrático central. Las coincidencias entre elites ganaderos y la organización militar, quienes llevaban el peso del enfrentamiento con la guerrilla, se vieron reforzadas por la oposición conjunta a la negociación directa entre la presidencia y la subversión izquierdista, la cual fue considerada por militares y propietarios como una traición por parte del gobierno en Bogotá. En este contexto, la coincidencia del desencanto de propietarios asediados por la guerrilla, la práctica de contrainsurgencia del ejército y los llamados a la defensa propia frente a la subversión de grupos ligados al narcotráfico, confi-



guraron un campo relacional que propicio el cambio de identidades y lealtades, y facilitó la formación de un amplio apoyo social a las ACCU, aparato armado de influencia regional.

Desde un punto de vista más conceptual, el análisis del conflicto en el valle del Sinú indica que las políticas son también identidades socialmente construidas, en permanente negociación y transformación, al igual que las identidades nacionales, étnicas o raciales, las cuales no responden a características naturales, inmutables o primordiales de grupos humanos, sino que son el resultado de un proceso social (Calhoun, 1994). Este enfoque no imputa a los individuos o actores colectivos atributos o comportamientos derivados del nivel de desarrollo (moderno/industrial o tradicional/preindustrial) o de la categoría social a la que pertenecen (artesanos, campesinos o esposa de trabajador), sino que tiene en cuenta la localización de ese actor en el campo relacional donde está inmerso (Somers, 1993).

El estudio del conflicto en el valle del Sinú y sus alrededores señala, por ejemplo, que las identidades no han seguido estrictas divisiones de clase, sino por el contrario, los alineamientos y coaliciones han llevado a resultados más complejos, los cuales dependen de los contextos relacionales de la movilización y el conflicto. Además, el caso estudiado deja observar que la identidad política no es un núcleo estable del individuo o una colectividad, algo que permanece idéntico y sin cambio a lo largo del tiempo, sino que es un resultado de un proceso que necesita una activación explícita y pública

desde el campo del poder (Hall, 1996; Eley y Suny, 1996; Hobsbawm, 1994).



IDENTIDADES POLÍTICAS E INSTITUCIONES

La dinámica política generada por las diferentes formas de intervención estatal en el Departamento de Córdoba desde los años 60, no se desarrolló en un vacío institucional. Por el contrario, la forma de centralización del poder político, la cual no permitió elecciones locales de alcaldes sino desde 1988, y la operación del sistema democrático, limitada por los acuerdos bipartidistas del Frente Nacional que se extendieron en la práctica hasta finales de los años 80, tuvieron efectos contundentes en la constitución de identidades y actitudes políticas radicales de los sectores subalternos: campesinos, obreros y trabajadores, maestros y estudiantes, microempresarios, profesionales². En concreto, el tipo de centralización del poder estatal en pie hasta 1988, contribuyó a la polarización política, al reducir las oportunidades para acuerdos y alianzas, y en general la competencia política, y limitar las posibilidades de acceso al poder local de sectores minoritarios o sin expresión nacional.

El nombramiento de gobernadores por el presidente, y de alcaldes por aquellos, de acuerdo con los resultados de las elecciones para Congreso, impidió que se consolidaran sectores políticos minoritarios, como los grupos que apoyaron a los campesinos en el valle del Sinú en los 70, accedieran al poder mediante alianzas, y tuvieran la posibilidad de obtener los recursos organizativos y culturales para ser contendores mayores en la disputa electoral. Al quedar por fuera de ésta, no pudieron promover sus propuestas y perspectivas, ni tampoco competir con liberales y conservadores en la creación de marcos de interpretación de los hechos políticos en la arena pública. Además, los efectos de la ley electoral que ordenaba la elección simultánea de concejos municipales, asambleas departa-

mentales y congreso, conocidos también como la "ley de arrastre", llevaron a que los congresistas, representantes de las elites regionales, acumularan excesivo poder en relación con la diversidad de intereses, identidades, perspectivas y necesidades de la población local. El control de la distribución de los empleos públicos y de los recursos de inversión originados en el fisco central fueron definitivos para la formación y afianzamiento de los conocidos "barones electorales regionales".

Esos efectos de la forma de centralización, de la legislación electoral, junto con los privilegios a favor del Partido Liberal y Conservador otorgados por el régimen de gobierno bipartidista y la exclusión de otros partidos, incluidos los comunistas, favorecieron la conformación regional de espacios públicos estrechos y culturas políticas excluyentes, que no reconocieron la diversidad y pluralidad de la sociedad³. En aquellas, primaron prácticas y discursos que no permitieron "visibilidad" a esa diversidad de identidades políticas y culturales, a no ser en la forma descalificadora de "extremistas" o "marginales". Estas, a diferencia de lo sancionado como liberal-conservador, no fueron reconocidas en pie de igualdad por las autoridades, quedando por fuera de la "comunidad política" que caracterizó a liberales y conservadores desde el acuerdo del Frente Nacional en 1958.

En las regiones con conflictos sociales y movimientos con ideologías diferentes a las bipartidistas, como en Córdoba y Sucre, esos obstáculos institucionales a la participación de grupos subalternos propiciaron una experiencia excluyente de la organización y operación del poder, y del estado central en particular. Esa experiencia se hizo aún más opresiva debido a la represión de la protesta social y política por las fuerzas armadas, quienes ejercieron su papel con un criterio de seguridad y orden público para la solución de un problema político y de justicia social. La confluencia de estos factores configuraron una dinámica institucional que facilitó la formación y reproducción de identidades radicales en los grupos subalternos —bien sea de resistencia o de cambio—, opuestas a las de las redes de poder liberal-conserva-

dor, organizadas alrededor del monopolio al acceso a los espacios públicos regionales y a las diferentes organizaciones del Estado, desde donde legitimaron el orden bipartidista.⁴

Para el análisis del cambio de identidades políticas en Córdoba, este trabajo considera cuatro períodos. El primero va desde 1968 hasta 1983, cuando el reformismo agrario desde el ejecutivo intentó solucionar el conflicto en el campo, hecho que agudizó la disputa por el acceso a recursos materiales y promovió la acción colectiva de los grupos interesados. El segundo, abarca desde 1983 hasta 1991, cuando una nueva iniciativa desde la presidencia condujo al inicio de negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros, en un marco de enfrentamientos armados, asesinatos políticos y masacres de población civil. Durante el tercero, entre 1991 y 1992, la desmovilización y desarme guerrillero, la disolución de grupos paramilitares y el control del poder local, fueron los hechos significativos de este breve período postconstituyente. Y el cuarto, de 1993 en adelante, la seguridad para los propietarios y la pacificación a toda costa marcaron la dinámica regional de rearme de los grupos paramilitares, reinserción de guerrilleros amnistiados y aumento de los desplazados por la violencia. En un lapso de 15 años, la agenda del debate político del departamento tuvo una viraje de 180 grados. La iniciativa pasó de las organizaciones campesinas, reformistas urbanos y revolucionarios, a los hacendados, comerciantes, ganaderos y presuntos narcotraficantes, y el centro del debate se trasladó del acceso a recursos materiales y simbólicos por parte de grupos desposeídos o excluidos, a la oferta de seguridad y orden,

además de un sentido claro de la actividad gubernamental, para los propietarios pudientes.



LA ACCIÓN COLECTIVA ANTES DEL PROCESO DE PAZ (1968-1983)

En Córdoba no se consolidó un movimiento cívico o regional en los años 80 que impulsara un proyecto radical de organización societal y del estado de las dimensiones del Frente Amplio del Magdalena Medio, el Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia o el Movimiento Inconformes de Nariño. Sin embargo, el reformismo agrario de la administración liberal de Lleras Restrepo (1966-70) facilitó la movilización y expresión de sectores campesinos y grupos de activistas políticos que habían sido marginados por la dinámica institucional descrita arriba, situación que fue aprovechada por éstos para ganar posiciones y audiencia en el espacio y cultura pública local. El posterior fracaso de la reforma contribuyó a crear una gran desconfianza frente a la intervención del Estado central, percepción que fue compartida, aunque por razones distintas, tanto por las elites del departamento como por los campesinos y grupos populares.

Las tomas, marchas, invasiones y acciones campesinas en Córdoba y en el vecino Sucre entre 1970-1973, representaron cerca de un tercio del total nacional de las acciones colectivas campesinas. En este período, la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC, movilizó sus efectivos en todo el país para

- 2 El institucionalismo histórico es una perspectiva de análisis que polemiza con los enfoques individualistas y descontextualizados de la acción colectiva. El enfoque tradicional hace énfasis en cómo los arreglos institucionales moldean, intermedian y canalizan las decisiones sociales. La nueva perspectiva plantea superar la atención exclusiva en los contextos y los límites a la movilización, para resaltar la constitución mutua de instituciones, intereses y motivos, y actores. Esto significa enfatizar la dimensión constitutiva de identidades y significados de las instituciones, más que su mediación o limitación de la acción colectiva (Brubaker, 1996). Instituciones se definen como los patrones de actividad supraorganizacionales mediante los cuales los humanos conducen su vida material, junto con los sistemas simbólicos que categorizan y le dan sentido a esa actividad (Friedland y Alford, 1991).
- 3 La cultura política se define como el campo en donde confluyen diferentes prácticas e instituciones desde donde se negocia el ejercicio del poder (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998).
- 4 Sobre identidades legitimadoras, de resistencia o de cambio, ver Castells (1997).

evitar el desmonte de la política de reforma agraria estatal por el gobierno conservador de Misael Pastrana (1970-1974), Córdoba y Sucre fueron epicentros de esa resistencia al cambio de énfasis de la política agraria. Con escaso o ningún apoyo dentro del bipartidismo liberal-conservador, el respaldo de la izquierda Comunista y Socialista a la ANUC no significó mayores logros materiales para sus afiliados, dada la reducida influencia de esos grupos en la definición de políticas. Bajo las consignas de "tierra sin patronos" (socialistas) y "tierra para el que la trabaja" (comunistas de las diferentes líneas), campesinos y activistas políticos intentaron desconocer el régimen extensivo de uso y acceso a la tierra, para promover uno más equitativo, proyecto que fue derrotado tanto en la negociación en el Congreso, como en la movilización por la represión estatal.

A pesar de su fracaso, el intento de reforma propiciado por el gobierno central tuvo un impacto profundo y duradero en la dinámica política local. El apoyo a las reivindicaciones de los campesinos sin tierra y pequeños propietarios por parte de ese aliado tan poderoso, abrió un espacio de negociación y debate que permitió participación a individuos y grupos campesinos y de activistas sociales y políticos que hasta el momento no habían tenido un reconocimiento público en la legitimidad de sus aspiraciones y propuestas. Aunque fue sólo por poco tiempo, esa "apertura" de la esfera pública local dominada por la elites ganaderas, en

favor de una con rasgos más pluralistas y de justicia social, permitió el florecimiento organizativo de asociaciones de usuarios de servicios del Estado, de pobladores barriales y estudiantes, y en general, de la capacidad asociativa de los grupos subordinados. Esto fue importante porque se crearon redes de comunicación y solidaridad que contribuyeron a consolidar y articular identidades y proyectos políticos alternativos o radicales, contrarios a los de los opositores a las reformas. Además, esa dinámica organizativa y de movilización llevó a una ampliación de las demandas, ya no sólo por el acceso a la tierra, sino por otros servicios como educación, salud y vivienda, teóricamente garantizados por la constitución nacional.

El nuevo gobierno conservador encabezado por Pastrana Borrero (1970-74), hizo énfasis en la industrialización de la agricultura mediante del apoyo a los propietarios pudientes. Ese cambio enfrentó al gobierno con grupos populares y radicales con distintos grados de consolidación organizativa en el valle del Sinú. Las oportunidades para la cohesión ofrecidas por el gobierno anterior resultaron claves en este *empoderamiento* popular. A pesar de esas diferencias en cohesión y organización, estos grupos adelantaron una ola de protestas campesinas sin precedentes, que se sumó a la oposición frontal de estudiantes, profesores y trabajadores al proyecto de privatizar la educación pública, en particular la universitaria.



La respuesta contra las autoridades fue tanto más irreverente cuanto escasas las actitudes o prácticas hacia la concertación con los grupos populares. Como resultado, la subversión del orden creado por el latifundio ganadero se convirtió en un propósito de esos grupos excluidos. Aquella alcanzó el fondo de la sociedad cordobesa, llegando hasta el corazón de la exaltación del poder terrateniente y masculino en la sociedad: las tradicionales corralejas del 20 de enero, máxima exhibición pública del poder de las elites ganaderas. Los ánimos de venganza y agresión de los grupos excluidos por la nueva política agraria y educativa obtuvieron su revancha en el terreno simbólico y material, cuando las corralejas fueron suspendidas en Montería en 1971, luego de que el "público descuartizó y se comió" tres toros donados por los ganaderos, y después apedreó el palco de la junta e incendió otros.⁵ La historia se repitió en Sahagún, Cereté y Ciénaga de Oro unos años después, cuando "gentes de los barrios 'periféricos' de Montería", se trasladaron a estas ciudades y apedrearon buses, lanzaron tierra a los palcos, y sacrificaron a los animales. Bajo el grito de "salven la corraleja", ganaderos escandalizados por la transgresión demandaron mano fuerte a las autoridades.⁶

Los ánimos en Córdoba continuaron caldeados hasta 1974, año de cambio de gobierno y finalización formal del Frente Nacional: del conservador Pastrana Borrero al liberal López Michelsen. Al día siguiente de la posesión del nuevo gobernador nombrado por el presidente López, un paro cívico departamental pedía solución a la crisis financiera de la Universidad de Córdoba, pago de los sueldos de sus profesores, empleados y obreros, solución a la pésima situación de las calles de Montería, al mal funcionamiento de los servicios de agua y luz, libe-

ración de campesinos detenidos, restitución de maestros despedidos y rebaja del alto costo de la vida, problemas heredados del gobierno del "Frente Social" de Pastrana Borrero. El paro fue total en Montería, Sahagún, Cereté, Lórica, San Pelayo, Ciénaga de Oro y otros municipios.⁷ La jornada terminó con la declaración del toque de queda a partir de las seis de la tarde en todo el departamento, luego de incendios, pedreas y ataques a la fuerza pública.

En Sahagún, los manifestantes destrozaron la sede de la empresa de telecomunicaciones y de la Federación de Ganaderos, y atacaron a piedra la residencia del médico Rodrigo Bula, hermano del senador y ex ministro de agricultura, Germán Bula. Lo mismo hicieron con las oficinas de la Caja de Crédito Agrario y de la Electrificadora de Córdoba. Los ataques parecieron calculadas acciones contra oficinas gubernamentales o familias ligadas con el poder.⁸ Algo similar ocurrió en Cereté, en donde los manifestantes liberaron a los presos, destruyeron expedientes, quemaron la tesorería municipal, atacaron "el barrio de los ricos", apedrearon las casas de los jefes políticos, incendiaron la sede de la Federación de Algodoneros, y saquearon, a media noche, los almacenes del IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario). Un estudiante fue muerto en Cereté durante el paro, y en el sepelio, al día siguiente, se presentaron desórdenes similares, esta vez contra el cuartel de la policía y el palacio municipal. Estudiantes construyeron barricadas en varias calles de la ciudad, desde donde mantuvieron escaramuzas con la fuerza pública.⁹ Las elites locales se preguntaban por los responsables de tales actos, dirigidos contra objetivos tan precisos. Frente al saqueo de las despensas del IDEMA, los grupos afectados reclamaban claridad a las autoridades: "¿caso el pueblo tenía

5 El Espectador, enero 9 de 1974.

6 Ibid.

7 La República, agosto 21 de 1974.

8 El Tiempo, agosto 22 de 1974.

9 El Espectador, agosto 23 y 24 de 1974.

hambre a esas horas de la noche?”. Entre tanto, la prensa hablaba de agitadores profesionales venidos de otras ciudades del departamento.

La situación en otras regiones del país no era menos grave. El nuevo Ministro de Gobierno, el conservador alvarista Cornelio Reyes, haciendo eco de los gobiernos militares del Cono Sur, habla de la necesidad de imponer un “régimen de disciplina social” frente a la protesta popular. Semanas antes, el presidente saliente Pastrana Borrero, había declarado que la “guerrilla en Colombia había quedado extinguida definitivamente”, y que durante su gestión se había consolidado la paz pública y la reconciliación nacional. Además, Pastrana se preciaba de haber reconstruido el bipartidismo, “de acuerdo con la gran tradición de nuestra historia y de la base misma de nuestra nacionalidad. Con el bipartidismo el país recobró ese eje de equilibrio, que es el centro ideológico de esos dos grandes partidos tradicionales”.¹⁰ Aunque esta declaración hacía referencia a la recuperación bipartidista del control del sistema político, amenazado por la ANAPO del general (r) Rojas Piniella en 1970, también aludía a la recuperación del monopolio de la arena pública y del estado burocrático para los liberales y conservadores. En efecto, para Pastrana Borrero, fiel representante de esa mentalidad exclusivista, la nación colombiana estaba constituida por los dos partidos tradicionales, sus votantes y sus mitos, y todo lo diferente debería desaparecer, integrarse o ser extinguido. Los efectos de esta práctica social se reflejaron en rutinas tan sencillas como la de aspirar a un empleo público, para lo cual había que contar con la respectiva recomendación del jefe político y registrarse como perteneciente a uno de los dos partidos.

Para el ex presidente liberal Alberto Lleras Camargo las cosas no eran tan sencillas. Uno de los problemas más graves del país, en su criterio, era ese bipartidismo que tanto había elogiado el ahora ex presidente conservador. Según lo indicó Lleras, el país había hecho “un formidable despliegue de indisciplina social” durante 1974, pero la responsabilidad mayor recaía sobre sus dirigentes. En efecto, el Congreso, desoyendo los límites de alzas sala-

riales para empleados y obreros del sector privado y para los trabajadores del estado, impuestos por el nuevo gobierno, decretó un incremento mayor para sus emolumentos. Fustigando el ejemplo de los congresistas, el ex presidente salió de su retiro y firmó un editorial en el diario *El Tiempo*: “Ese desorden moral en las capas inferiores de la sociedad se corona con la irritante y absurda determinación de los parlamentarios, clase ya mirada con desconfianza por el país, de aumentarse los emolumentos que reciben por un trabajo realizado, visiblemente, con descuido, ligereza y ausentismo. Así quienes deberían dar ejemplo de sensatez y disciplina, son los primeros en mostrarse como una de las castas más voraces de la nación”.¹¹

Mientras tanto, las demostraciones de insubordinación en contra del Estado y el orden local en Córdoba, pusieron en guardia a los dirigentes del departamento. “La hostilidad campesina destruyó el antiguo orden”, se quejaba el senador conservador Miguel Escobar Méndez, para quien ya no era posible, “sin sentir temor”, volver a las haciendas (Romero, 1995), y responsabilizaba por ese “envaletonamiento de los campesinos” a las promesas de tierra hechas por el gobierno liberal de Lleras Restrepo. Para el dirigente ganadero Rodrigo García Caicedo, “la demagogia de la izquierda y la infiltración del marxismo en la educación”, eran las causas de la rebelión. Además, García, desconfiado y resentido por la intervención del gobierno central en favor de los campesinos durante el gobierno de Lleras Restrepo, consideraba que “si el campesino tiene derecho a la tierra, el propietario tiene derecho a defenderla (Romero, 1995)”.

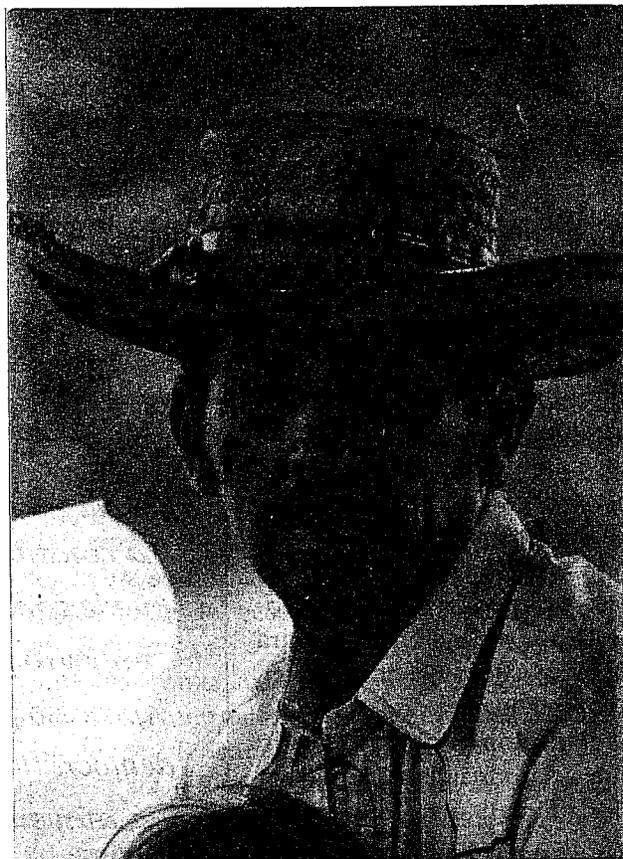
La década del 70 terminó con una clara tendencia a la polarización política en la arena política cordobesa. De acuerdo con la hipótesis de este trabajo, para los campesinos, el fracaso de la reforma agraria promovida por el Estado, la ausencia de respaldo estatal para enfrentar los efectos empobrecedores de la comercialización de la agricultura y del mercado, lo mismo que el uso de la represión para enfrentar sus reclamos frente a la explotación y dominación local, forjó una experiencia de cómo ope-

ra el poder, el Estado y el bipartidismo, que contribuyó a moldear una identidad política de resistencia. Esa experiencia e identidad, una vez en contacto con los proyectos revolucionarios de origen urbano, forjaron una visión del mundo, de la historia y del papel del Estado, en la que la rebelión armada era una salida posible para construir un orden social más justo, si no para dar una señal de oposición al monopolio de la vida pública local. Eso mismo parece haber sucedido con grupos de jóvenes cristianos en Montería, trabajadores urbanos vinculados al Estado, al sector privado y con trabajadores independientes.

Para las elites del departamento, entre tanto, creció el sentimiento de amenaza e inseguridad. Los grupos subordinados que reaccionaron en contra de la nueva política agraria y educativa transgredieron los límites de las jerarquías sociales locales con más o menos impunidad. Además, la posibilidad de desprotección por parte del Estado central, como lo demostraron los intentos de reforma agraria del liberalismo, llevó a los propietarios cordobeses a buscar aliados más confiables en el nivel nacional. En efecto, la facción liberal de Edmundo López Gómez y del conservador Francisco Burgos, mayoritarias dentro de sus colectividades en Córdoba, apoyaron abiertamente la mano dura del gobierno Turbay Ayala (1978-1982) contra la asociación y participación pública popular, y lograron mantener un férreo control sobre la comunicación y vida política local. El senador López Gómez fue figura destacada del gobierno turbayista y brindó apoyo decidido al Estatuto de Seguridad, conjunto de medidas que le otorgaban amplias prerrogativas judiciales y de manejo del orden público a la institución castrense. El resultado fue lo que los afectados llamaron la "criminalización de la protesta social", y también, el abandono del terreno de la reivindicación social a los movimientos insurgentes por parte de los dos partidos históricos.

10 El Colombiano, mayo 1 de 1974.

11 El Tiempo, diciembre 3 de 1974.



Para comienzos de los años 80, la represión rural y de los sindicatos urbanos, daba la impresión de estabilidad y control de la élite sobre el orden local. Sin embargo, la agitación pública proseguía. ADEMACOR, la asociación de maestros del departamento, junto con profesores y directivos de la Universidad de Córdoba, además de profesionales vinculados con agencias estatales, continuaban movilizándose y publicitando propuestas reformistas y revolucionarias para el campo, para la financiación de la educación pública y el desarrollo regional, alternativas a las políticas oficiales de beneficio preferencial de la elite local. La Federación

de Trabajadores de Córdoba, FESTRACOR, se resistía a las políticas salariales del gobierno central y a la disminución del presupuesto estatal para la educación pública. Grupos culturales como El Túnel de Montería, críticos de la estética pastoril e idílica con que la cultura oficial local representaba la sociedad del Sinú, hacían referencia a la marginalidad de la mayoría de su población y a la necesidad de impulsar nuevas formas de expresión artísticas más sensibles al entorno social. Fundaciones editoriales, como la Fundación del Caribe, difundían versiones críticas de la historia del departamento, y la Iglesia católica, con su posición ética de preferencia por los pobres y los programas de concientización y educación de los jóvenes, también buscaba promover la movilización en contra de la injusticia y la corrupción. Esta actividad de resistencia y negociación por parte de lo que se podría llamar una sociedad civil con hegemonía popular, contribuyó a mantener vigentes esos proyectos alternativos de participación y ciudadanía radical.

Por su lado, las redes de activistas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en todas sus vertientes, y otras agrupaciones menores que sobrevivieron a la crisis organizativa de este sector en los años 70, insistieron en enfrentar a los latifundistas ganaderos y en denunciar la política bipartidista de abandono del campesino pobre. La presión sobre las autoridades regionales continuaba, aunque mucho más reducida que una década atrás. La ANUC impulsó las tomas de oficinas públicas, la ocupación de tierras sin uso económico visible o baldías, e insistía en el derecho al usufructo de las ciénagas secas durante el verano, (Aldana, 1995; Salgado, 1998).

Con todo, el problema agrario empezó a pasar a un segundo plano frente a una percepción de

crisis política generalizada desde finales de los años 70. La mediación del sistema político entre los conflictos sociales y el diseño de política estatal, si bien había sido defectuoso antes, ahora se transformó en una caricatura. El dominio obtenido por el ala turbayista del Partido Liberal, fuerza mayoritaria en el departamento, llegó acompañado de mano dura frente a la movilización social y de dudosos manejos en la administración pública. Las redes bipartidistas, especialmente la liberal, mayoritaria en Córdoba y en Montería, controlaban 23 de las 26 alcaldías (20 los liberales y 3 los conser-

vadores) a inicios de los años 80. Sin embargo, esa mayoría liberal ya no obedecía a la dirección del directorio departamental, en donde las familias López Gómez, de Montería, y Bula Hoyos, del bajo Sinú y de las Sabanas, ejercían control. Por el contrario, emergieron nuevas redes políticas, asociadas a familias de origen árabe que habían migrado en las primeras décadas del siglo, las cuales consolidaron un gran poder económico y crecieron luego en influencia política a

la sombra de las maquinarias electorales de los jefes tradicionales, especialmente de la liberal.

A finales de los años 70, esas redes políticas nuevas se independizaron de sus antiguos mentores, y como sucedió en otros países de las Américas con grupos de migrantes similares (italianos e irlandeses en Estados Unidos, árabes en Ecuador o Argentina, etc.), esos negociantes buscaron trasladar el éxito económico al plano político, invirtiendo fuertes sumas de dinero en la disputa electoral. La compra de votos apareció como práctica definitoria de las campañas, las cuales aumentaron astronómicamente su costo. En palabras del ex ministro conservador Escobar Méndez, "la política se convirtió exclusivamente en cuestión de dinero (Romero, 1995)". Los efectos sobre la administración pública fueron inmediatos. Los

*La constitución de 1991
puede considerarse como
un logro parcial en un
proceso prologado de
democratización política,
aún sin terminar.*

destinatarios de las obras contratadas por el departamento y los municipios tenían nombre propio desde el principio. La corrupción en el manejo del presupuesto público tuvo un incremento sin precedentes.

Dos fenómenos nuevos acompañaron este proceso de fragmentación de las elites políticas del departamento. Primero, la llegada de un grupo nuevo de inversionistas antioqueños a finales de los años 70, quienes hicieron masivas adquisiciones de tierra en el alto Sinú, Montería y en la región del San Jorge. La ganadería había perdido rentabilidad frente a otras posibilidades de inversión urbanas, y era el blanco fácil de lo que se conoció como los "dineros calientes". Los antiguos inversionistas "paisas", pertenecientes a familias prestantes de Medellín, percibieron la nueva situación de conflictividad en el campo, y decidieron vender al mejor postor. Según el ex ministro Escobar Méndez, se dió paso a negociantes con una "ambición sin límites" (Romero, 1995). Además de fragmentadas políticamente, las elites cordobesas tampoco tuvieron liderazgo económico.

A esta fragmentación en el liderazgo regional, se sumó otro factor que agravó aún más la situación. El Ejército Popular de Liberación, EPL, con una significativa presencia y autoridad en el alto San Jorge y alto Sinú, decidió ampliar la influencia territorial y el consiguiente incremento en la extracción de recursos a los sectores pudientes del departamento. Este rememoró los miedos frente a la movilización social de los años 60 y 70, incrementó la percepción de inseguridad y de falta de control del orden social entre los propietarios. El EPL, en la primera conferencia nacional en 1981, había acordado un "plan de crecimiento nacional", el cual requería recursos, y Córdoba era una de las regiones en donde su consolidación e influencia eran mayores (Villarraga y Plazas, 1994). La disputa política y social de las décadas anteriores, continuó el camino de la polarización, ahora en la forma de dominio territorial y militar de la guerrilla.



LA GUERRA Y LA PAZ (1983-1991)

La amnistía de casi 500 guerrilleros detenidos y el inicio de negociaciones entre el presidente Belisario Betancur y las principales organizaciones subversivas a finales de 1982, fue recibido como una franca traición por los ganaderos cordobeses. Estos unieron sus voces a las del alto mando de la institución militar, quienes consideraban que con las nuevas medidas de "orden público" del gobierno, se demostraba "la debilidad de la democracia para protegerse a sí misma (Behar, 1985)". La amnistía y la negociación del cese al fuego era considerada por los militares como una gran victoria política de la guerrilla, con la cual "se le asestaba un golpe fuerte a la estructura moral y sentimental del Ejército, de las Fuerzas Militares (Behar, 1985)".

Para los ganaderos del Sinú era impensable que se hablara de negociaciones de paz con los insurrectos, en medio de la ola de secuestros y extorsiones que enfrentaban. En efecto, entre 1983 y 1990, la tasa de secuestro por 100.000 habitantes en este departamento más que dobló la tasa promedio nacional en 1984 y 1989, los momentos de mayor diferencia, aunque era baja en relación con la de otras regiones con conflicto similar (Cubides, Olaya, Ortíz, 1995). Como consecuencia de esta coincidencia, los ganaderos identificaron las negociaciones de paz como la causa de esa situación. Para ellos, al igual que para los militares, la subversión estaba aislada antes del proceso de paz, y expandió su influencia como resultado de éste. Además, junto con otros opositores a las negociaciones, consideraron que el presidente Betancur había entregado las banderas de la lucha social y reivindicativa a

la guerrilla, al reconocer la necesidad de reformas políticas y sociales a cambio de la paz.¹²

La nueva política de la presidencia de Betancur tuvo consecuencias paradójicas en la dinámica del conflicto armado, y en particular, en las regiones con influencia de las organizaciones de izquierda. El convencimiento de los altos mandos del Ejército, de la dirigencia política y económica regional, y de buena parte de la nacional acerca de la pertinencia de escalar el conflicto para derrotar a la insurgencia izquierdista, mostró la ausencia de apoyo a las políticas del ejecutivo, y por tanto, la baja capacidad regional para territorializar su autoridad. Además, el contexto internacional de enfrentamiento de la Guerra Fría tampoco era un buen augurio para la iniciativa presidencial. Ese divorcio entre las políticas de negociación de la Presidencia con la guerrilla, frente a la oposición concurrente de la organización militar y las elites regionales, produjo una situación cercana a lo que se ha llama-

do "colapso parcial del estado", en términos de Paul Oquist, en el que narcotraficantes, en asocio con elites locales desafectas de la autoridad central, aprovecharon esas nuevas condiciones institucionales y políticas para construir un aparato paramilitar.

En suma, el giro del gobierno central hacia una política de apertura en su trato con la insurgencia, iba en contravía de los intereses, identidades y marcos de interpretación consolidados por los arreglos institucionales vigentes: la forma de centralización de la autoridad estatal sin elecciones locales y

regionales, el régimen de monopolio bipartidista que seguía operando en la práctica y la obligación de un alineamiento con Estados Unidos frente a la bipolaridad internacional. La inusual intervención del gobierno civil en relación con el orden público, al igual que la reforma agraria 15 años atrás, encontró pocos aliados dentro de las elites regionales. Y de igual

manera, como también 15 años antes, despertó gran entusiasmo y expectativa dentro de los disidentes, radicales y políticamente excluidos. Sin embargo, esta vez los resultados fueron más tangibles, aunque limitados, y con un costo en vidas humanas sin comparación en América Latina, con excepción del El Salvador. La Constitución de 1991 puede considerarse como un logro parcial en un proceso prologado de democratización política, aún sin terminar.

El inicio de la negociaciones de paz y la desprotección de las autoridades centrales frente al acoso de los grupos guerrilleros llevó al gremio ganadero a una frontal oposición a los acerca-

mientos entre gobierno y subversión. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, José Raimundo Sojo, repetidas veces expresó su no rotundo al diálogo durante la década de los 80, porque según él, éste era infructuoso: "lo que la guerrilla quiere es tomarse el poder".¹³ Mientras tanto, la campaña de finanzas de la guerrilla seguía inclemente. Quienes no pagaron las contribuciones enfrentaron las consecuencias. La quema de fincas y el "fusilamiento de reses" se extendieron, como ocurrió en 1988 con la hacien-



Fidel Castaño

da de Rodrigo García, gerente de la Federación de Ganaderos del departamento. Los ganaderos con más influencia y recursos administraron las fincas a distancia, y obtuvieron la estrecha y generosa colaboración de la fuerza pública: "por medio de oficiales del Ejército que van en helicóptero".¹⁴

El hostigamiento de la guerrilla en contra de los ganaderos alcanzó niveles extremos durante los gobiernos de Betancur (1982-86) y Barco (1986-90). Las contribuciones exigidas crecieron tan arbitrariamente, que uno de los ex comandantes del EPL recuerda que "un hombre con cincuenta vaquitas o con una finca media, ya se le catalogaba de rico ... imagínese, gente acostumbrada a la miseria [los guerrilleros], ahora manejando millones (Villarraga y Plazas, 1994)." Como lo reconoce un antiguo mando del EPL, "la orientación era 'conseguir dinero en cantidades alarmantes porque la guerra era muy costosa', eso llevó a que se crearan muchas comisiones de finanzas (Villarraga y Plazas, 1994)".

El medio estaba preparado para una mayor polarización de las identidades políticas de las elites ganaderas. Sólo faltaba quién liderara el proceso. El modelo de autodefensas y paramilitares del Magdalena medio impulsado por la XIV Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío, estaba disponible (Medina, 1990). Además, sectores políticos, periódicos de la capital y hasta ministros del gobierno del presidente Barco defendían el derecho a la defensa armada.¹⁵ Con esto, Fidel Castaño, antiguo narcotraficante antioqueño y uno de los nuevos inversionistas en ganadería del departamento, obtuvo la legitimidad para liderar esa transformación de prácticas, discursos y lealtades dentro de los propietarios de la región. Las condiciones estaban dadas para que los propietarios locales dieran un paso más allá del simple descontento y recelo frente a las intervenciones del estado central. Se trataba de tomar iniciativas que suplantaran ese Estado y pusie-

ran en entredicho su territorialidad. El proyecto tenía liderazgo, base social y también aprobación tácita de la organización militar estatal. Rodrigo García, gerente de la Federación de Ganaderos, recuerda, "se despertó ánimo de lucha; continuar pagando la vacuna era seguir engordando al enemigo; nos salvábamos con la comunidad o nos hundíamos con ella."¹⁶

Para 1987, el escenario de la "guerra sucia" estaba montado. El Ejército inauguró la XI Brigada en Montería, Castaño armó su ejército privado y los ganaderos cambiaron el destino de sus aportes: de los morrales de la guerrilla a las alforjas de Castaño, giro que también vino acompañado de un cambio semántico: de "la vacuna ganadera" se pasó a los "aportes para seguridad". Entre tanto, los diálogos de paz podían hacerse en la capital o en los campamentos guerrilleros, pero las negociaciones se definían en la práctica por medio de los atentados y masacres de dirigentes políticos de izquierda en las capitales.

Además, un ingrediente nuevo hizo más explosiva la situación. La primera elección de alcaldes por voto directo se realizó en 1988, y las posibilidades de que los frentes electorales de la izquierda con aprobación de la guerrilla —Unión Patriótica y Frente Popular— ganaran alcaldías, puso al rojo la disputa por el poder político y burocrático local. Esa competencia era un hecho sin precedentes en la historia colombiana, ya que hasta ese año los gobernadores nombraban a los alcaldes. La posibilidad de que antiguos guerrilleros, sus voceros o los tradicionales dirigentes de los frentes electorales de izquierda, pasaran a ser potenciales líderes políticos con capacidad de competir por el poder local, agudizó la intransigencia de muchos años de rencores y odios acumulados por la guerra irregular. Hasta ese momento, la Unión Patriótica y el Frente Popular participaban en las coaliciones gobernantes de tres municipios: San Andrés de Sota-

13 *Carta Fedegan* # 24, agosto-septiembre, 1988.

14 *Ibid.*

15 Declaraciones del ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, *El Tiempo*, 29 julio de 1987.

16 Entrevista con Rodrigo García Caicedo, Montería, agosto 11 de 1997.



vento, en el bajo Sinú, con gran presencia de descendientes de los indios zenúes, y en Tierralta y Valencia, en el alto Sinú, futuro fortín de las temidas ACCU. El inicio de la reforma al modelo de centralización estatal vigente y del desmonte del régimen bipartidista aumentaron los intereses en juego con la nueva política de paz. Además, la no entrega de armas por parte de la guerrilla, en contra de la condición que exigía la institución castrense para no oponerse a la Unión Patriótica y las otras alianzas electorales resultado del proceso de paz, convirtió en verdaderos polvorines los escenarios regionales con presencia de la izquierda. El cuadro estaba completo para convertir a los adversarios en enemigos, y para dar inicio al juego estratégico excluyente de que cuando "gano yo, pierdes tú".

Al guerrillerismo discursivo de los generales frente a la Unión Patriótica y otras alianzas similares, a las que calificaron de "brazo desarmado de la subversión", siguió una política de tierra arrasada de las fuerzas de seguridad y paramilitares. La táctica fue golpear a los diferentes "anillos de apoyo" de lo que se consideró como sostén civil de la subversión, es decir, asesinar líderes, activistas y simpatizantes de izquierda o de organizaciones sociales, para eliminar su pilar social, y así, según esta teoría contrainsurgente, aislar a la guerrilla. Suponiendo una conexión automática y directa entre organizaciones guerrilleras y frentes legales de lucha social y política, paramilitares, autodefensas, y fuerzas de seguridad arremetieron contra diversos sectores de población civil desarmada en zonas de conflicto. Al tiempo, eliminaron las posibilidades de oposición política en Córdoba y otras regiones del país, sin lesionar la capacidad de los aparatos armados de la insurgencia, supuesto objetivo de su reacción. Las FARC se replegaron a zonas más altas en el nudo de Paramillo y en la serranía de Abibe, en los límites entre Antioquia y Córdoba, mientras que el EPL, dada la dinámica interna que buscaba participación en un movimiento legal más amplio, siguiendo el ejemplo del Movimiento 19 de Abril, M-19, de todos modos se habría desmovilizado.

En septiembre de 1987 fue asesinado el primer dirigente del Frente Popular. Era directivo del magisterio y candidato a la alcaldía de Tierralta por ese movimiento. Luego siguió una racha de atenta-

dos en los que la UP y *A Luchbar* también son el blanco. Caen candidatos al concejo o en ejercicio, sindicalistas, maestros, dirigentes campesinos, indígenas, profesores universitarios y periodistas radiales. Los candidatos de la izquierda elegidos en 1988 son sometidos a intensa presión por la Brigada XI, con frecuentes interrogatorios en las instalaciones militares, además de amenazas anónimas de muerte. En abril de 1988 se inician los asesinatos colectivos. 37 campesinos son asesinados en el corregimiento de Mejor Esquina, y luego son cometidas aproximadamente 20 masacres más (Negrete, 1995).

En suma, entre 1988 y 1990, se registraron en información de prensa nacional cerca de 200 asesinatos políticos y un poco menos de 400 presumiblemente políticos.¹⁷ Según las estadísticas de la consejería de Defensa y Seguridad de la Presidencia, la tasa de asesinatos políticos y la tasa global de homicidios para el período fue similar (aproximadamente 34/100.000 habitantes), indicando que, de ser ciertas esas cifras, todos los crímenes cometidos en ese departamento durante ese período fueron aparentemente con fines políticos, es decir, aproximadamente 1.200 asesinatos (Echandía y Escobedo, 1994). La cifra da sólo una dimensión numérica de la tragedia. Bajo el liderazgo de Castaño y las fuerzas de seguridad, ésta alianza logró consolidar una movilización local amplia en contra de la guerrilla, condena que incluyó también a los frentes electorales que contaban con su consentimiento o aprobación. El Ejército justificó la incapacidad para proteger la participación electoral de estos grupos, aduciendo que si sus compañeros estaban secuestrando y extorsionando, ellos debían enfrentar las consecuencias, puesto que sólo eran "el brazo desarmado de la subversión". Esta práctica discursiva y pública desde el poder, significó la aprobación desde la misma autoridad de todo tipo de atentados en contra de los miembros de esos frentes.



Paralelamente, se libraron fieros combates entre la guerrilla y el Ejército en el alto Sinú y en la Serranía de Abibe, la cual separa a Córdoba de Urabá. El coronel Jaime Díaz López, comandante del batallón Junín, de Montería, cae en combate cerca a Tierralta en febrero de 1988. El Ejército envía helicópteros artillados y tanques cascabel. En mayo, en un enfrentamiento con una fuerza combinada del EPL y las FARC, caen un subteniente y 9 soldados, y continúan los bombardeos aéreos sobre la zona de San Pedro de Urabá y Saiza, entre Córdoba y Urabá. En agosto, una fuerza conjunta del EPL y las FARC ataca a Saiza, en el alto Sinú, con el pretexto de ser una base de entrenamiento paramilitar. En la operación mueren 11 militares y 10 civiles más. En octubre de 1988 se cumple un año de campaña militar continua, en la que la guerrilla tiene más de 30 bajas.¹⁸

Habría que esperar año y medio –hasta abril de 1990– para el reinicio de operaciones militares de gran escala. Pasadas las elecciones de marzo, el ejército introduce dentro de sus tácticas de contra-insurgencia la Brigada Móvil No. 1, compuesta por soldados profesionales. La innovación táctica está planeada para atacar masivamente áreas de gran influencia guerrillera. El dispositivo sirvió de ensayo para la toma de “Casa Verde”, cuartel general de las FARC, en diciembre del mismo año. El Ejército movilizó cerca de 2.500 efectivos por tierra y helicópteros artillados, y atacó tres puntos del departamento simultáneamente: el alto Sinú, el alto San Jorge, y zonas rurales del municipio de Montelíbano. Los reportes militares informaron de 17 bajas y 15 heridos en las filas guerrilleras, destrucción de 8 campamentos subversivos, decomiso de radios, municiones y equipos de campaña. Además, se anunció el rescate en los límites con Antioquia de casi 5.000 reses robadas por la guerrilla, hecho que fue desmentido por los subversivos.¹⁹ Según parece, la operación

fue acordada por el Ejército con los ganaderos, comerciantes, la Federación de Cultivadores de Cereal, la Sociedad de Arquitectos, y otros sectores. Estos darían un estruendoso apoyo a la campaña iniciada por la Brigada, al tiempo que pedirían al gobierno el cese de las negociaciones de paz entre el gobierno y los guerrilleros del EPL. Propietarios y militares consideraban que el diálogo era una táctica de distracción de los rebeldes para evitar el hostigamiento militar (Villarraga y Plazas, 1994).

A pesar de los asesinatos, hostigamientos y rumores sobre futuros atentados, la negociación entre la Presidencia y los insurgentes permitió la “visibilidad” de individuos, grupos y movimientos locales que habían estado en los márgenes de la vida legal, y que tenían planteamientos, propuestas y eran parte de la solución al conflicto armado. El EPL es un caso típico de este hecho. Esta apertura de la esfera pública, similar a la ocurrida durante la época de la reforma agraria, y las posibilidades de comunicación, asociación y propaganda que permitieron, fue, sin embargo, mucho más riesgosa y limitada que la ocurrida durante los años de las movilizaciones campesinas. Las nuevas posibilidades de participación quedaron reducidas a los actores ya conocidos. Grupos sindicales impulsaron la movilización de opinión en contra de la guerra, aunque con resultados inciertos. En marzo de 1989, Ademacor y personalidades ligadas a la izquierda organizaron un encuentro por la Vida, la Paz y la Democracia en Montería, que no contó con la participación esperada, dada la situación de desmovilización social causada por el terror.

Para las elecciones de marzo de 1990, el Frente Popular decide establecer alianzas con Jesús María López, hermano del ex senador liberal Edmundo López Gómez y candidato a la alcaldía de Montería por el Partido Liberal. Acusado de colaboración con

17 *Justicia y Paz*, informes trimestrales 1988, 1989, 1990.

18 *Justicia y Paz*, informes trimestrales 1988, 1989, 1990.

19 *El Heraldo*, abril 19 de 1990.

los grupos paramilitares y político controvertido, López podía ofrecer algún tipo de protección frente a los atentados y desapariciones (Villarraga y Plazas, 1994). En lo que se consideró un balance aceptable, este sector obtuvo 13 concejales, un diputado y un representante a la Cámara en las elecciones de 1990, con menos del 5% de la votación del departamento. Por su lado, entre liberales y conservadores alcanzaron casi 200 concejales. La UP, que dos años antes había conseguido 7 concejales, participó como socio menor en otras coaliciones.²⁰

Lo precario de la "amenaza" electoral de la izquierda hace ver la desproporción de la reacción en su contra. La barbaridad de ésta también da una dimensión de los temores, fabricados o reales, de las elites cordobesas, y de las consecuencias catastróficas de invocar esos miedos como elementos de acción política por parte de agencias del Estado, con el fin de justificar la persecución. El discurso y la práctica contrainsurgente de la Guerra Fría, junto con los temores de estos grupos construyeron una representación de la población civil simpatizante o militante de la izquierda, que se asoció con un "enemigo interior". Con base en esta representación se convirtieron en permisibles prácticas y discursos que invitaron y fomentaron actos de agresión en contra de miembros de la misma comunidad, y que en otras circunstancias hubieran sido inaceptables. Esto se explica, porque en esa construcción de "enemigo", éste se convierte, por izquierdista, en un anónimo indeseable, y por tanto desechable. Dentro de esta lógica, Fidel Castaño se erigió como redentor, porque hizo retroceder a la guerrilla y porque controló la protesta e insubordinación social, sin importar el costo en sufrimiento y vidas humanas.



OPORTUNIDAD PARA LA RECONCILIACIÓN (1991-1992)

El proceso que culminó con la desmovilización del EPL a comienzos de 1991 y la creación del

movimiento legal Esperanza, Paz y Libertad, no sólo fue el resultado de la "combinación de todas las formas de lucha" por parte de las Fuerzas Armadas, paramilitares, autodefensas, ganaderos y comerciantes, sino también de un deseo dentro del EPL por participar en un proyecto "civilista y pluralista, que cuestionara la vigencia de la lucha armada" y que intentara superar por la vía pacífica las limitaciones a la participación política impuestas por el régimen bipartidista (Villarraga y Plazas, 1994). De igual forma, la dinámica de la zona bananera de Urabá, limítrofe por el occidente con el valle del Sinú, también influyó. El retiro de inversionistas debido a la violencia corría el riesgo de evolucionar hacia una crisis del eje bananero, representada en el abandono definitivo de los productores para localizarse en otras áreas de Centroamérica o de la Costa caribe colombiana. Como reconoció uno de los mandos del EPL, "comprendimos que el problema no era mantener una guerra con Fidel, porque había un movimiento social de por medio que ya mostraba signos de cansancio, de no querer más violencia (Villarraga y Plazas, 1994)".

Luego de contactos iniciales entre el EPL y Castaño, éste último lanzó en agosto de 1990 la iniciativa de desmovilizar a sus fuerzas, si el EPL era consecuente con los anuncios de incorporarse a la vida civil y utilizar otras formas de lucha diferentes a la violencia. El sorprendente giro parece que fue propiciado, además de las negociaciones entre gobierno y guerrilla, por un inesperado gesto de parte de los guerrilleros que convenció a Castaño de la voluntad de paz de aquéllos. Una patrulla de milicianos del EPL detuvo a un grupo de escoltas que brindaban protección a una mujer que se desplazaba entre Urabá y Córdoba, en el norte del departamento, sospechando que éstos formaban parte de un grupo de paramilitares. Sólo se enteraron de que la mujer era hermana de Castaño, cuando éste se comunicó por radio con un campamento guerrillero en Pueblo Nuevo, para pedir su liberación. El EPL accedió, sin contraprestación alguna, lo que facilitó las negociaciones posteriores (Villarraga y Plazas, 1994).

El hecho fue preludio de acercamientos políticos no menos sorprendentes y de transformaciones en los campos relacionales de los actores locales imposibles de imaginar meses atrás. La desmovilización del EPL en Córdoba fue rica en este tipo de experiencias de conciliación entre antiguos enemigos. El anuncio de la distribución de cerca de 16.000 hectáreas a campesinos pobres o víctimas del enfrentamiento armado, y de la organización de FUNPAZCOR, fundación que brindaría asesoría técnica y financiera a los favorecidos (más de 2.500 familias), además de los recelos, rechazos y críticas que originó, también contribuyó a crear un campo relacional que facilitaría las aproximaciones entre los antiguos rivales. Sin embargo, la debilidad progresiva que caracterizó al EPL, resultado de divisiones internas, de la continuación del enfrentamiento armado y de las agresiones de los frentes de las FARC regionales y de las fuerzas de seguridad en contra de sus militantes, preparó el camino para una paulatina asimilación de una parte de sus militantes en el aparato militar y político de las ACCU.

Pero antes de concluir con esta absorción, las posibilidades para obtener otros resultados no fueron menos reales. La primera elección de gobernadores en 1992, que permitió avanzar en la centralización política a partir de la elección de autoridades locales y regionales, de acuerdo con lo ordenado por la nueva constitución aprobada el año anterior, ofreció oportunidades para un proceso de reconciliación. El hecho también brindó la posibilidad de poner a prueba la verdadera dimensión de la apertura del régimen político. La Alianza Democrática M-19,²¹ aprovechando el espacio institucional para la elección de gobernador que no existía antes, ofreció a Rodrigo García Caicedo la candidatura de su movimiento a la gobernación. Conservador alvarista y

gerente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, García Caicedo había sido un combativo opositor público del antiguo EPL y de la izquierda en general. Se definía como "conservador doctrinario", y fiel admirador de Laureano Gómez, radical dirigente conservador de mitad de siglo. Además, se distinguía por haber sido un crítico enérgico de los intentos de reforma agraria gobiernos liberales y de las formas de intervención del Estado central en la región, así como de la corrupción de la clase política de su departamento. Alvaro Jiménez y Otty Patiño, ex combatientes del M-19, fueron los emisarios de la propuesta de la AD M-19. "Conversamos de 10 a.m. a 2 a.m. del día siguiente. Tuvimos muy pocas diferencias y las soluciones que proponíamos para el departamento también eran muy parecidas. La charla fue cordial y franca", recuerda García Caicedo.²²

El dirigente ganadero indica que los emisarios de la audaz coalición le insistieron en que "para demostrar sus intenciones de paz, lo habían escogido a él como candidato, para que no hubiera duda. Dijeron que para ellos la paz era más importante que una gobernación".²³ También le sugirieron, señala García, conseguir el respaldo de Alvaro Gómez para hacer más viable el apoyo de los conservadores de su departamento. Fidel Castaño, luego de intensas reuniones e intercambios con los miembros de la AD M-19, también dió su venia para la alianza, y le dijo a García que "no le voy a hacer campaña, pero me parece muy interesante lo que va a pasar en el departamento".²⁴ Finalmente, García obtuvo el respaldo de Alvaro Gómez -quien "le advirtió que tuviera cuidado con el M-19"- y de un sector de su partido en el departamento, ya que el pastranismo declinó participar en la campaña. El dirigente ganadero aceptó la postulación y durante el discurso de lanzamiento en el Club Campestre de

20 Estadísticas Electorales, 1988, 1990, Registraduría Nacional.

21 Agrupación que reunió al antiguo M-19, a la nueva Esperanza, Paz y Libertad, y a antiguos miembros del partido comunista y de la UP, entre otros.

22 Entrevista con Rodrigo García Caicedo, Montería, agosto 11 de 1997.

23 Ibid.

24 Ibid.



Montería, justificó su decisión frente a los críticos diciendo: "en la posguerra en Francia, los comunistas habían apoyado a De Gaulle, no porque el general se hubiera vuelto comunista, sino porque los comunistas se habían vuelto Gaullistas". La coincidencia electoral de dos sectores tan disímiles, calca, en parte, las coaliciones de la asamblea Constituyente de 1991, lo mismo que el antagonista: el liberalismo mayoritario en el departamento.

Desde el punto de vista del EPL, la alianza les proporcionó protección, neutralizando a enemigos que quisieron tomar venganza por las acciones de su pasado guerrillero. Sin embargo, las enemistades amenazaron desde muchos bandos, y la asociación con los ganaderos originó la reacción de las FARC y de un sector del EPL, grupos que no participaron en el proceso de desmovilización. En efecto, García Caicedo se opuso a varios intentos por atentar contra la vida de Marcos Jara, comandante guerrillero del EPL oriundo de Córdoba, y ahora activo cuadro de su campaña. Ésta, mientras tanto, se desarrolló con un tono anticorrupción y anticlientelista que tenía nombre propio: denunciar los vicios del liberalismo, mayoría electoral de Córdoba. El programa de la campaña hizo énfasis en el servicio a la comunidad, en la honestidad y el rescate del departamento de "la clase política corrupta, la cual se con-fabula contra el interés público".

García Caicedo perdió por menos de 1.000 votos frente a Jorge Manzur, candidato apoyado por Francisco Jattin, del grupo de políticos que emergió a finales de los años 70 y comienzos de los 80, senador liberal de Lórica, en el bajo Sinú, y de acuerdo con sus críticos, encarnación viva de todos los vicios del clientelismo.²⁵ Según el ganadero, el triunfo fue facilitado por la alianza entre el Ejército, la policía y los políticos Liberales tradicionales, quienes permitieron el fraude en su contra en el área del San Jorge, en donde "la supuesta participación electoral fue del 95%".²⁶ Desde entonces, dice el ganadero, las relaciones con las fuerzas armadas dejaron de ser las mismas, y en ocasiones han sido tensas. García sostiene que "los mandos militares piensan que yo los traicioné. Lo que pasa es que el Ejército está fanatizado, está ideologizado, lo que les impide pensar con claridad".

La experiencia mostró que las posibilidades de reconciliación no sólo dependieron de la voluntad de los actores o de la disposición de aceptar nuevas fuerzas en la arena política por las agrupaciones ya presentes, sino también por la existencia de espacios institucionales, como el electoral, en donde los antiguos rivales pudieron interactuar. Es decir, la apertura del régimen y la nueva forma de centralización crearon los espacios para el desarrollo de esos acercamientos. Para García Caicedo, a pesar de no haber ganado, "la campaña fue una pedagogía excelente para acercar antiguos enemigos; lograr esto hubiera sido una labor de toda una vida".²⁷ Además, la alianza también puso de presente los beneficios y las posibilidades de protección que ese tipo de pactos brindaron a los sectores que hicieron tránsito de la guerrilla hacia la participación política legal. Si bien el proceso quedó trunco y no se desarrolló hasta el punto de una transformación de identidades políticas, como sucedió con la convivencia entre liberales y conservadores durante el Frente Nacional, sí mostró que ese resultado no era un objetivo imposible. Sin embargo, la continuación de las hostilidades armadas y la creciente debilidad de una de las partes, en este caso la del EPL, terminó por abortar el proceso. La ausencia de

recursos económicos por parte del EPL y la disolución organizativa que siguió, fueron factores que afectaron las posibilidades de éxito de la experiencia. La dependencia de una de las partes frente al otro lado de la coalición, no fue la mejor solución. Al final, la estrategia que dice que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él terminó por ser la única posibilidad de sobrevivencia para un sector significativo de los miembros del EPL.



LA PAX SINUANA (1993)

A pesar de los acercamientos y ensayos para superar el conflicto que la apertura política y los nuevos espacios institucionales permitieron en Córdoba durante 1991-92, la inercia de la guerra terminó por imponerse. La polarización de identidades entre las ACCU, los grupos guerrilleros que no se desmovilizaron —las FARC y el ELN— y las Fuerzas Armadas se acentuó aún con mayor determinación, cerrando las posibilidades de crear una “comunidad política” en el valle del Sinú. A pesar de las posibilidades para una mayor participación política que la constitución de 1991 ofreció, en la práctica éstas han sido inexistentes por la continuación del enfrentamiento armado y el dominio claro que las ACCU lograron consolidar, con la anuencia de la institución militar. La división del EPL, el sabotaje de las FARC hacia el nuevo proceso, la guerra sucia de las fuerzas de seguridad, la indiferencia de las redes de poder clientelistas y del sector privado, las limitaciones del gobierno central, y las dificultades de la “reinserción” a la vida civil de los antiguos combatientes, fueron obstáculos más poderosos que los actos de reconciliación (Uribe, 1994). A pesar de que el nuevo gobernador liberal, Jorge Manzur, dio participación al EPL en la primera administración

elegida por voto popular, las amenazas y asesinatos en contra de los antiguos militantes del EPL cerraron las posibilidades de consolidación política de este grupo, ahora en la legalidad.

En efecto, cerca de 200 ex-combatientes, de los 2.149 desmovilizados del EPL en todo el país, habían sido asesinados por diferentes razones después de dos años de la reinserción (Uribe, 1994). En Córdoba, los acuerdos de paz cobijaron a 349 combatientes del EPL, 30 de la Corriente de Renovación Socialista y 16 del PRT. En este departamento, la mayoría de los guerrilleros eran campesinos entre 16 y 20 años, sin educación primaria. Por esto, el programa de reinserción puso bastante énfasis en proporcionar oportunidades para finalizar primaria y validar bachillerato. Después de 3 años de funcionamiento, 34 habían terminado primaria, 27 secundaria, 11 media vocacional y 6 cursaban estudios superiores. En cuanto a proyectos productivos, 18 proyectos rurales, con 152 socios, continuaban operando, aunque 5 de los 18 proyectos urbanos ya habían quebrado para ese entonces (Negrete, 1994).

Más mal que bien, el programa de reinserción en Córdoba ofreció algunas oportunidades para “reencontrarse” con la vida civil a algunos de los antiguos guerrilleros. Sin embargo, como los espacios geográficos dejados por el EPL fueron ocupados por otras organizaciones guerrilleras, esto llevó a la reactivación de las autodefensas y paramilitares de la familia Castaño, ahora bajo el mando de Carlos Castaño, hermano menor de Fidel. Bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, el rearme y reorganización de este grupo incluyó un apoyo social y político más amplio, y un cambio operativo hacia formas menos arbitrarias, acorde con su intención de convertirse en un aparato político-militar similar al de las guerrillas. El grupo también reafirmó su papel de fuerza contrainsurgente, reemplazando paulatinamente a las fuerzas de seguridad del ejército, y montando una red de comunicación

25 Entrevista con Germán Bula Hoyos, Bogotá, 1989.

26 Ibid.

27 Ibid.

que ha permitido a 950 fincas ganaderas de la región estar en contacto permanente.²⁸ Esta forma operativa sirvió de modelo para la propuesta de las cooperativas de seguridad CONVIVIR, sistema de vigilancia rural que el Ejército ha pretendido ampliar a todo el país, como forma de incluir en las tareas de control político y social a los mismos propietarios. Esta ha sido una vieja aspiración de las Fuerzas Armadas, ante la persistencia del conflicto político y el incremento en la criminalidad.

Al mismo tiempo, este aparato militar surgido en Córdoba y Urabá, ha impulsado desde 1993, en su nueva etapa como ACCU, la agrupación bajo una misma sigla y mando de las diferentes autodefensas y paramilitares del país. Carlos Castaño logró conformar un frente político-militar con proyección nacional, denominado Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que opera como una avanzada militar anticomunista, en "defensa de la propiedad privada y la libre empresa", organización que ofrece su modelo de seguridad a propietarios de otras regiones del país afectados por la guerrilla. Definidos como una "organización civil defensiva en armas",²⁹ obligada a asumir su protección frente a la extracción de recursos y amenaza contra la vida por parte de la subversión, justifican la limpieza política por el "abandono del estado" de sus funciones de seguridad frente a los propietarios.

El sólido respaldo de las ACCU en Córdoba lo atestigua la carta que 75 ganaderos enviaron al Ministro de Defensa en enero de 1997, por la persecución contra Carlos Castaño y los anuncios públicos ofreciendo 500 millones de pesos de recompensa por informaciones sobre su paradero. La carta dice, "Castaño nos quitó el miedo y nos enseñó a pelear contra nuestro enemigo",³⁰ señalando la transformación del comportamiento político de este grupo social, el apoyo relativo a la autoridad central en esta región del país y la solidez de las lealtades locales y regionales, en contraposición con las nacionales, que han logrado las ACCU. A lo que no hace referencia la carta es que para Castaño el enemigo fundamental ha sido la población civil. El mismo lo afirma: "en guerra, un civil desarmado es un térmi-

no relativo. Dos tercios de la guerrilla son miembros desarmados que operan como población civil, y colaboran con la guerrilla" (Castro, 1996).

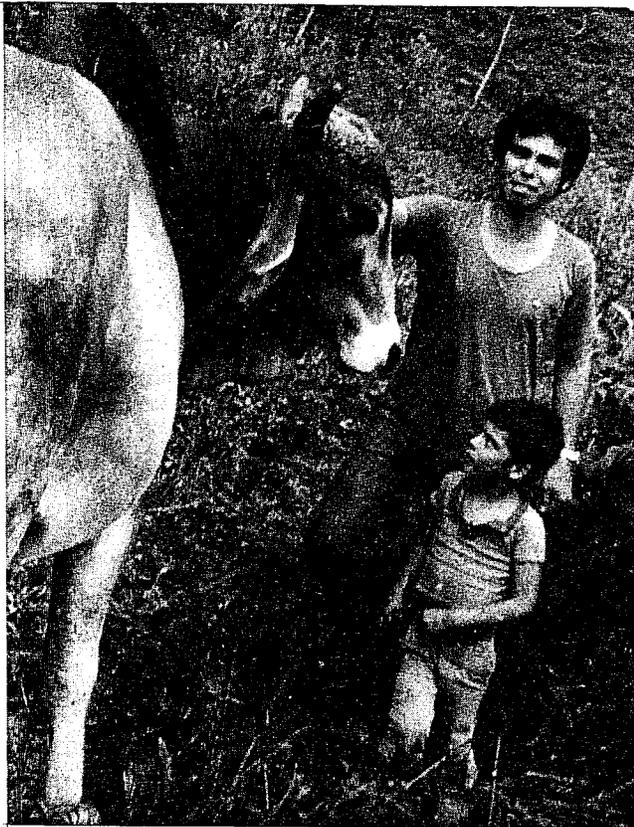
El número de población desplazada sólo en Córdoba por esta concepción del conflicto, y por las represalias de la guerrilla, ha llegado a cerca de 115.000 personas, aproximadamente el 10% de la población total de este departamento (Negrete, 1994). Los asentamientos de refugiados en los alrededores de Montería, Cereté, Montelíbano, y otras ciudades menores, son de una pobreza extrema, la cual afecta principalmente a niños, jóvenes y mujeres, población catalogada por los organismos estatales como "de alto riesgo social", debido a los fenómenos de prostitución, drogadicción, opresión, abusos, y delincuencia a los que están expuestos.

Si bien la extorsión y el secuestro disminuyeron ostensiblemente en el departamento a partir de 1991, primero como resultado del acuerdo regional de paz, luego como efecto de la desmovilización del EPL (Cubides, Olaya y Ortíz, 1995) y finalmente como efecto del modelo de "estado de seguridad nacional" local implementado, la dimensión político-administrativa del departamento es lamentable. La represión en contra de los grupos llamados a desarrollar una labor crítica y de denuncia en favor de un manejo transparente de la administración pública y del presupuesto oficial, dejó sin fiscalización a los políticos locales. Esta imposibilidad de ejercer control público sobre el funcionamiento del Estado gracias a las nuevas oportunidades de la democracia local, ha convertido a las ACCU en parte funcional de la corrupción del departamento. No sin razón Córdoba y Sucre han aportado el mayor número de congresistas vinculados con el proceso 8.000.



CONCLUSIONES

El análisis de la disputa social y política en el Departamento de Córdoba mediante la polarización de las identidades políticas, intenta poner en



primer plano los efectos de las instituciones y la intervención del estado en la constitución de conflictos. Además, a través de la movilización y protesta que éstos generan, el texto pone de relieve la formación y transformación de las identidades, y por tanto, de los comportamientos políticos. Desde este punto de vista, el trabajo comparte algunos de los elementos del llamado "institucionalismo histórico", el cual reconoce la interacción entre instituciones y actores, y los efectos de los diseños institucionales en las formas del conflicto societal (Friedland y Alford, 1991; Putnam, 1993). Así, por ejemplo, las apreciaciones que indican un cambio de estrategia por parte de la guerrilla, la cual ya no lucharía por una toma directa del poder nacional, como parece sucedía antes, sino por conquistar poder local y regional, tienen que ir acompañadas del examen de las oportunidades que abrió la reforma de descentralización política y administrativa iniciada a mediados de los años 80, y de la dinámica política local que desencadenó.

El estudio también señala cómo la organización de un aparato armado -lo que implica la implementación de un sistema tributario- ha fortalecido identidades locales y regionales alrededor de esa experiencia, en contraste con un debilitamiento de la identificación con las autoridades nacionales con asiento en Bogotá. Este ha sido el caso de las ACCU, y aunque es claro el papel jugado por el narcotráfico en los inicios de esta organización, parece que el peso específico de ganaderos, comerciantes y en general de propietarios ha aumentado desde 1993, ante la falta de efectividad estatal para ofrecerles protección. El hecho resalta un elemento sobre el cual no se ha hecho suficiente énfasis: que el monopolio de los medios de coerción es el resultado de un proceso social, y no un factor inherente o un atributo natural de la organización estatal central. Este punto también pone en evidencia que las capacidades del Estado no son fenómenos absolutos, sino relacionales, y dependen de la cooperación o resistencia que ofrezcan los diferentes sectores de la sociedad.

El análisis de los tres períodos muestra la dificultad del Estado central por territorializar su autoridad. Esta ha sido repetidamente desafiada, bien sea por sectores subalternos, y más recientemente por elites regionales. Es claro el papel que ha desempeñado el narcotráfico en este proceso, aunque no ha sido el único factor, como se ha señalado a lo largo del texto. También hay que reconocer los efectos políticos de las intervenciones del Estado central, las cuales han debilitado la lealtad de esas elites locales a la autoridad en Bogotá, sin fortalecer el apoyo de otros sectores sociales o promover el desarrollo de otros aliados. Esto garantizaría una mayor territorialidad de esa autoridad central.

Finalmente, el acercamiento y alianza electoral de antiguos enemigos políticos y militares presentado en este estudio, indica un camino posible,

28 Revista Semana #669, 28 de febrero de 1995.

29 Documento de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en las que se declaran movimiento político-militar, julio de 1997.

30 El Tiempo, 18 de enero de 1997.

entre muchos otros, para construir una verdadera "comunidad política" en Colombia. Sin embargo, los resultados de la experiencia señalan las dificultades que enfrentan los procesos de paz parciales, en donde no están todos los que tienen que estar, y los efectos de la desproporción de recursos entre los participantes, una vez se ha producido la desmovilización. Como se demostró para Córdoba en el período 91-92, las dificultades son enormes. Se puede lograr una pacificación en donde desaparezca una de las partes, bien sea por asimilación o eliminación, pero esto no significa una reconciliación y la creación de una comunidad política. Para esto se necesita una redefinición de las identidades políticas enfrentadas y la construcción desde la misma localidad de una cultura pública integrativa que facilite la "acomodación" de los grupos en conflicto.



BIBLIOGRAFÍA

- Aldana, Camilo. 1995. "Veinticinco años de políticas y desarrollo agropecuario." En *Revista Coyuntura Colombiana*, Nueva Época, 12: 3.
- Alvarez, Sonia, Evelina Dagnino y Arturo Escobar. 1998. "Introduction: The Cultural and the Political in Latin American Social Movements," en *Culture of Politics/Politics of Cultures. Re-visioning Latin American Social Movements*, editado por Sonia Alvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar, Westview Press.
- Behar, Olga. 1985. *Las guerras de la paz*, Planeta. Bogotá
- Brubaker, Rogers. 1996. *Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe*, Cambridge University Press.
- Calhoun, Craig 1991. "The Problem of Identity in Collective Action," en *Macro-Micro Linkages in Sociology*, editado por Joan Huber, Sage Publications.
- Castells, Manuel. 1997. *La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol.2 El Poder de la Identidad*, Alianza Editorial. Madrid.
- Castro, Germán. 1996 "Los paramilitares," en *En Secreto*, Planeta.
- Cubides, Fernando, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortíz. 1995. *Violencia y Desarrollo Municipal*, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia.
- Echandía, Camilo y Rodolfo Escobedo. 1994. *Violencia y Desarrollo en el Municipio colombiano, 1987-1993*, Presidencia de la República.
- Eley, Geoff y Ronald Grigor Suny. 1996. "Introduction: From the Moment of Social History to the Work of Cultural Representations," en *Becoming National. A Reader*, editado por Geoff Eley y Ronald Grigor Suny, Oxford University Press.
- Friedland, Roger y Robert Alford 1991. "Bringing Society Back In: Symbols, Practices, and Institutional Contradictions," en *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, editado por Walter W. Powell y Paul J. DiMaggio, the University of Chicago Press.
- Giddens, Anthony. 1996. *Más allá de la izquierda y la derecha. el futuro de las políticas radicales*, Ediciones Cátedra S.A.
- Hall, Stuart 1996 "Who Needs 'Identity?'" en *Questions of Cultural Identity*, editado por Stuart Hall y Paul Du Gay, Sage Publications.
- Hobsbawm, Eric J. 1994 "Identidad", en *Revista Internacional de Filosofía Política* # 3 (Madrid).
- Mandani, Madmood 1996. *Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, Princeton University Press.
- Medina, Carlos 1990 *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Editorial Documentos Periodísticos.
- Negrete, Victor 1995 *Los desplazados por la violencia en Colombia. El caso de Córdoba*, Editorial Antillas (Barranquilla).
- Palacios, Marco 1995. *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994*, Norma.
- Peñaranda, Ricardo 1998. *De las armas a la política: el caso del movimiento armado Quintín Lame*, manuscrito en proceso de publicación.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press.
- Reyes, Alejandro 1997. "Compra de tierras por narcotraficantes," en *Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social*, Ariel-PNUD-Minjusticia.
- Romero, Mauricio 1995. "Transformación rural, violencia política y narcotráfico en Córdoba, 1953-1991" en *Controversia* # 167, CINEP.
- Salgado, Carlos y Esmeralda Prada 1998. *La protesta campesina en el período 1980-1995*, Cinep, manuscrito por publicar.
- Somers, Margaret 1993. "Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy," *American Sociological Review* 58: 2.
- Tilly, Charles 1996. "Citizenship, Identity, and Social History," en *Citizenship, Identity, and Social History*, editado por Charles Tilly, International Review of Social History Supplement 3, Cambridge University Press. 1995 *Political Identities*, Working Paper # 212, Center for Studies of Social Change, CSSC, New School for Social Research.
- Uribe, María Victoria 1994. *Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil*, Colección Papeles de Paz, CINEP.
- Villarraga, Alvaro y Nelson Plazas 1994. *Para reconstruir los Sueños. (Una Historia del EPL)*, Colcutura- Progresar-Fundación Cultura Democrática.